

Señores:

JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE YOTOCO VALLE DEL CAUCA

E. S. D.

REFERENCIA: **PROCESO VERBAL RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL**

DEMANDANTES: **HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS RODRIGUEZ,
KENLLY CAROLINA HERRERA MEDINA** en nombre propio
y de su menor hijo **OMAR ALEXIS VILLALOBOS HERRERA**

DEMANDADOS: **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS,
LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO
GRUPO C.L.A.U. S.A.
TRANSPORTES ESPECIALES DEL VALLE S.A - Sigla:
TEVSA**

RADICADO: **76-890-40-89-001-2023-00041-00**

ASUNTO: **CONTESTACION DEMANDA**

JACQUELINE ROMERO ESTRADA, mayor de edad, vecina de Palmira V., identificada con la Cédula de Ciudadanía No 31.167.229 de Palmira V., Abogada en ejercicio de la profesión, portadora de la Tarjeta Profesional No 89930 expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de Apoderada Judicial del Señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.413.290, en calidad de conductor del vehículo de placas **SER-115**, **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS** mayor de edad y vecino de Cali, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.114.737.042 y la Sociedad **GRUPO C.L.A.U. S.A.S. Sigla: GRUPO C.L.A.U. S.A.S.**, identificada con Nit. 900869631- 2 y con domicilio en Yumbo Valle, representada legalmente por el señor KARIM PEREA PEREA, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.730.176, o por quien haga sus veces, a quienes represento de conformidad con los poderes que aporto con el presente escrito de contestación de demanda. Así mismo me permito presentar escrito de **LLAMAMIENTO EN GARANTIA** que se realiza a la **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, dentro del término legal concedido, procedo a descorrer el traslado pertinente de la siguiente manera:

A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL HECHO 1: NO ES CIERTO. De acuerdo con el Informe Policial de Accidentes de Tránsito, se da la ocurrencia de un accidente de tránsito el 24 de julio de 2020, en la vía a Buenaventura, a la altura del Corregimiento de Mediacanoa – Yotoco Valle. **No es cierto** que el mismo se haya producido por la imprudencia del señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.114.737.042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS **SER-115**, teniendo en cuenta que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Transito acápite **No**

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica valorará en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso.

Se desconoce si el Informe de Accidente de Tránsito fue objeto de oposición por parte del señor HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS ante la Secretaría de Tránsito de Yotoco (V)

AL HECHO 2: No es cierto. El apoderado de la parte actora hace manifestaciones carentes de todo sustento fáctico y jurídico, toda vez que no hay prueba de lo aquí manifestado. Reitero lo manifestado en el hecho anterior, con relación al Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**

Como consecuencia mis poderdantes se atemperarán a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso; máxime que dentro del plenario no reposa prueba alguna de lo aquí manifestado por la parte actora

AL HECHO 3: No nos consta lo manifestado en este hecho, toda vez que el Apoderado de la parte actora hace manifestaciones sin tener prueba alguna. En el Informe Policial de Accidentes de Tránsito en el Numeral 13 "Observaciones" el Agente de Tránsito que conoció del caso manifiesta "Se anexa oficio aclaratorio S2020-No. 440/SETRA MNVCCU 12393 informando novedad sobre posible cambio de conductor No. 1". En ningún momento da certeza de que en realidad se hubiera presentado un cambio de conductor.

Se desconoce si el Informe de Accidente de Tránsito fue objeto de oposición por parte del señor HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS ante la Secretaría de Tránsito de Yotoco (V).

Por lo anterior nos atenemos a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso.

AL HECHO 4: No nos consta, no se trata de un hecho, se trata de una apreciación subjetiva de la parte actora.

En consecuencia, nos atendremos a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso.

AL HECHO 5: No nos consta, no se trata de un hecho, se trata de una apreciación subjetiva de la parte actora.

En consecuencia, nos atendremos a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso.

AL HECHO 6: No es cierto lo manifestado en este hecho por el Apoderado de la parte actora. El vehículo de placas **SER-115**, para la fecha de los hechos y de conformidad con el Informe Policial de Accidentes de Tránsito en su Numeral 8.1 el

conductor es el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.413.290, y quien porta licencia de conducción No. 94.413.290 Categoría C3 con fecha de expedición 27/01/2020.

En ese orden de ideas, se tiene que en el sistema procesal civil colombiano rige el principio de la carga de la prueba y ello implica que incumbe al actor probar cada una de las afirmaciones que realice.

Por lo anterior, me atengo a lo que resulte probado.

AL HECHO 7: Es cierto, de conformidad a las pruebas allegadas con el traslado de la demanda, no obstante, me atengo a lo que se pruebe mediante el debido contraste de documentos probatorios y demás medios idóneos en la correspondiente etapa procesal.

AL HECHO 8: Los demandantes a través de su apoderado realizan manifestaciones, respecto de las posibles lesiones que afirman haber sufrido el señor **HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS RODRIGUEZ**, que deberán ser demostradas en el sentido de lo que quieren hacer parecer, remitiéndose a evidencias que tengan el carácter de prueba como tal y que permitan la configuración del elemento personal y cierto del daño.

El doctor Jairo Parra Quijano en su libro “Manual de Derecho Probatorio” determina como características de la prueba la conducencia, pertinencia y utilidad. Define la conducencia como “idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho”; la pertinencia “Es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en este. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso”¹. Y por último establece sobre la utilidad de la prueba que “La prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que este solo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo”²

Ahora bien, respecto de la Historia Clínica aportada por la parte actora, me permito manifestar que la misma no cumple con los requisitos específicos que debe contener el documento para ostentar autenticidad, conforme lo establece el artículo 244, 246 del Código General del Proceso. La ausencia de estos requisitos impone desestimar esta prueba.

Sin embargo, será el Instituto de Medicina Legal a través de un perito médico, quien determine y señale las lesiones, incapacidades y secuelas si se llegaran a presentar, al igual que el mecanismo que las haya originado.

De otra parte, y de conformidad con el artículo 38 de la ley 100 de 1993, y el decreto 2463 de 2001, la función para determinar el porcentaje o pérdida de capacidad laboral, corresponde a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, autoridad establecida en la norma.

Por anterior este hecho debe ser plenamente probado y en consecuencia de lo anterior me atengo a las resultas del proceso.

¹ Parra Quijano, Jairo. “Manual de Derecho Probatorio”. Colombia: Librería. Ediciones del Profesional. 2006. p. 153

² Parra Quijano, Jairo. “Manual de Derecho Probatorio”. Colombia: Librería Ediciones del Profesional. 2006. p. 156

AL HECHO 9: No lo niego ni lo afirmo, me atengo a lo que resulte probado dentro del proceso.

Los demandantes enuncian una serie de situaciones totalmente ajenas a mi prohijado, pues las mismas corresponden a circunstancias de orden subjetivo perteneciente al ámbito familiar del actor, que deberán ser examinadas dentro del presente debate. En consecuencia, se atenderá a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso.

En el sistema Procesal Civil Colombiano, rige el principio de la carga de la prueba, y ello, implica que, incumbe al actor probar cada una de las afirmaciones que realice, pues no tendría sentido simplemente mencionar un sinnúmero de hechos, pretendiendo una supuesta indemnización, sin que exista un sustento probatorio que las acredite y que por tanto, demuestre sin duda alguna que la parte actora estaría en mejores circunstancias de no haber sido por el hecho dañoso que se le imputa y que este fue el resultado del actuar imprudente e imperito de los demandados.

En esta medida, el Juez sólo puede otorgarlos teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y racionalidad respecto a lo probado en el proceso. En este sentido, no basta simplemente con nombrar unas supuestas angustias o diversas circunstancias para pretender indemnización por este concepto, sino que es menester probar mediante los medios idóneos dicha afirmación, así como la magnitud de la alteración del estado emocional y psicológica de los afectados, resaltándose que, en este caso, brillan por su ausencia tales elementos de convicción

AL HECHO 10 al 14: Es cierto, de conformidad a la prueba allegada con el traslado de la demanda, no obstante, me atengo a lo que se pruebe mediante el debido contraste de documentos probatorios y demás medios idóneos en la correspondiente etapa procesal.

AL HECHO 15: NO ME CONSTA, no obstante, me atengo a lo que se pruebe mediante el debido contraste de documentos probatorios y demás medios idóneos en la correspondiente etapa procesal.

AL HECHO 16: Es cierto, de conformidad a la prueba allegada con el traslado de la demanda, no obstante, me atengo a lo que se pruebe mediante el debido contraste de documentos probatorios y demás medios idóneos en la correspondiente etapa procesal.

AL HECHO 17: Es parcialmente cierto, la **SOCIEDAD GRUPO C.L.A.U. S.A.S.** Sigla: **GRUPO C.L.A.U. S.A.S.**, propietaria del vehículo de placas **SER-115**, suscribió la **PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL- AUTOMOVILES No. C 2000013731** con **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, cuya vigencia es desde el 04/07/2020 00:00 horas hasta el 04/07/2021 00:00 horas.

No me consta respecto a lo manifestado por la parte demandante en cuanto a La Equidad Seguros

Sin embargo, debe aclararse que en cuanto a los riesgos cubiertos, nos atenemos a lo que efectivamente se demuestre en el proceso, como quiera que la póliza tomada con **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites asegurados, los deducibles pactados y las exclusiones de amparo.

AL HECHO 18: No lo niego ni lo afirmo, me atengo a lo que resulte probado dentro del proceso.

AL HECHO 19: A mis poderdantes, no les consta lo aquí manifestado por la parte demandante en el presente hecho por ser ajeno a lo manifestado, y en consecuencia se atemperará a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso; máxime que dentro del plenario no reposa prueba alguna de lo aquí manifestado por la parte actora.

AL HECHO 20: A mis poderdantes, no les consta lo aquí manifestado por la parte demandante en el presente hecho por ser ajeno a lo manifestado, y en consecuencia se atemperará a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso; máxime que dentro del plenario no reposa prueba alguna de lo aquí manifestado por la parte actora.

AL HECHO 21: No nos consta, no se trata de un hecho, se trata de una apreciación subjetiva de la parte actora. Adicionalmente, son normas legales transcritas que son inconducentes e innecesarias en este acápite de la demanda.

AL HECHO 22: No nos consta, no se trata de un hecho, se trata de una apreciación subjetiva de la parte actora.

AL HECHO 23: A mis poderdantes, no les consta lo aquí manifestado por la parte demandante en el presente hecho por ser ajeno a lo manifestado, y en consecuencia se atemperará a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso; máxime que dentro del plenario no reposa prueba alguna de lo aquí manifestado por la parte actora.

AL HECHO 24: A mis poderdantes, no les consta lo aquí manifestado por la parte demandante en el presente hecho por ser ajeno a lo manifestado, y en consecuencia se atemperará a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso; máxime que dentro del plenario no reposa prueba alguna de lo aquí manifestado por la parte actora.

AL HECHO 25: No nos consta, no se trata de un hecho, se trata de una apreciación subjetiva de la parte actora.

AL HECHO 26: No es un hecho. A través de este párrafo la parte actora manifiesta una serie de afirmaciones que no le constan a mi representado, pues corresponde a situaciones de orden subjetivo perteneciente al ámbito personal que deberán ser examinadas dentro del presente debate.

En este sentido, no basta simplemente con nombrar una supuesta afectación emocional, sino que es menester probar mediante los medios idóneos dicha afirmación, así como la magnitud de la alteración del estado emocional y

psicológico de los afectados, resaltándose que, en este caso, brillan por su ausencia tales elementos de convicción.

Por ende, me atengo a lo que se pruebe mediante el debido contraste de documentos probatorios y demás medios idóneos en la correspondiente etapa procesal.

AL HECHO 27: No es un hecho. A través de este párrafo la parte actora manifiesta una serie de afirmaciones que no le constan a mi representado, pues corresponde a situaciones de orden subjetivo perteneciente al ámbito personal y familiar que deberán ser examinadas dentro del presente debate.

En este sentido, no basta simplemente con nombrar una supuesta afectación emocional, sino que es menester probar mediante los medios idóneos dicha afirmación, así como la magnitud de la alteración del estado emocional y psicológico de los afectados, resaltándose que, en este caso, brillan por su ausencia tales elementos de convicción.

Por ende, me atengo a lo que se pruebe mediante el debido contraste de documentos probatorios y demás medios idóneos en la correspondiente etapa procesal.

AL HECHO 28: No es un hecho. A través de este párrafo la parte actora manifiesta una serie de afirmaciones que no le constan a mi representado, pues corresponde a situaciones de orden subjetivo perteneciente al ámbito personal y familiar que deberán ser examinadas dentro del presente debate.

En este sentido, no basta simplemente con nombrar una supuesta afectación emocional, sino que es menester probar mediante los medios idóneos dicha afirmación, así como la magnitud de la alteración del estado emocional y psicológico de los afectados, resaltándose que, en este caso, brillan por su ausencia tales elementos de convicción.

Por ende, me atengo a lo que se pruebe mediante el debido contraste de documentos probatorios y demás medios idóneos en la correspondiente etapa procesal.

AL HECHO 29: A mis poderdantes, no les consta lo aquí manifestado por la parte demandante en el presente hecho por ser ajeno a lo manifestado, y en consecuencia se atemperará a lo que se pruebe legal y oportunamente dentro del proceso. La parte actora presenta facturas que no cumplen con los requisitos de ley conforme al artículo 774 del Código de Comercio que enuncia: Requisitos de la factura:

“La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o

identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada...”.

Por lo anterior las facturas presentadas por la parte actora que no cumplan lo establecido en las normas del Código de Comercio no podrán valorarse como prueba.

OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

De conformidad con el Art. 206 de la Ley 1564 de 2012, nos permitimos de manera respetuosa presentar OBJECCIÓN frente a la liquidación de perjuicios realizados por la parte actora, la cual fundamentamos en la inexactitud, excesiva y errada forma de tasarlos.

De entrada, debe ser claro para el Despacho que cualquier condena por concepto de indemnización de perjuicios resultaría improcedente, en razón a que no existe fundamento factico ni jurídico que permita endilgar responsabilidad a la parte demandada en el presente caso y mucho menos existen pruebas conducentes y pertinentes que permitan establecer y tasar la cuantía del daño.

Ahora bien, en el remoto escenario en que el Despacho llegaré a atribuir responsabilidad a mi representada por los supuestos daños padecidos por los demandantes, debe tenerse en cuenta que la estimación de los perjuicios es absolutamente infundada

el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de un pasivo, causados por hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad. Establece el Código Civil en el artículo 1614, que se entiende por daño emergente el perjuicio o la pérdida.¹³ Dicho en forma breve y precisa, el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado. Dicho en forma breve y precisa, el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el daño emergente debe ser probado de forma clara, aportando las pruebas que lo acrediten y además que presenten relación directa con los hechos presentados en la demanda, sin embargo la situación que en la que nos presentamos actualmente se encuentra completamente alejada de lo dispuesto por la jurisprudencia sobre la

materia, toda vez que con la demanda se pretende el reconocimiento de un daño emergente sin que ni siquiera se determine de forma clara a qué gastos hacen referencia y además se omite presentar pruebas que lo acrediten de forma certera.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a que prosperen las pretensiones declarativas y de condena solicitadas por la parte actora en su escrito de demanda, puesto que las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, como quiera que los demandantes pretenden el pago de indemnizaciones de orden material y extrapatrimonial, sin que una obligación de esa índole hubiere nacido en cabeza de los demandados, entre otras razones, porque en materia de indemnización de perjuicios, el daño y la cuantía del mismo deben estar plenamente comprobados, asunto que no ocurre en el presente caso.

En este caso, no se reúnen los requisitos para que prosperen las pretensiones de la demanda, pues la culpa endilgada al señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, supuesto conductor del vehículo de placas SER-115**, es inexistente, toda vez que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana critica valorara en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso y además entre la actividad y la conducta desplegada por este y el hecho, de que la parte actora afirma que se generó el perjuicio por el cual se pretende una indemnización no existe relación de causalidad.

Consecuentemente se está ante una insuficiencia de la prueba, de parte del que está encargado de producirla, arrojando como consecuencia la denegación de su pretensión. *Actore non probandi, reus absolvitur*. La prueba incumbe a la parte demandante; quien debe aportarla en su debida oportunidad para poder ser controvertida y evitar así que a los demandados se les viole el derecho al debido proceso y defensa. Por lo anterior se puede concluir que los demandantes no han probado suficientemente su derecho y por ende están infundado en su pretensión.

Corolario de todo lo anterior, siendo menester hacer alusión a lo sostenido por el H. Consejo de Estado, así:

“(...) reitera la Sala que, por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como “onus probandi, incumbit actori” y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 de C.P.C. Correlativo a lo anterior, el demandado tiene el deber de probar los hechos que sustenta su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo ‘reus, in excipiendo, fit actor’. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos

medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 C.P.C.

De igual manera, el Honorable Consejo de Estado ha hecho varios pronunciamientos al respecto:

JURISPRUDENCIA. - Solo son indemnizables los daños ciertos. “Al respecto es oportuno recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, un daño cierto es aquel que consiste en un detrimento del patrimonio de quién lo sufre. Ahora bien, dicho detrimento puede ser pasado, presente o futuro, pero, en este último evento, es indispensable que no existan dudas sobre su ocurrencia. De ninguna manera son indemnizables los daños meramente eventuales, hipotéticos o posibles.” (C.E., Sec. Tercera, Sent. 2001-00489, mayo 3/2013. M.P. Danilo Rojas Betancourth).

JURISPRUDENCIA. –Responsabilidad del Estado. Certeza del perjuicio. “(...) los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman:

Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan solo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético. (C.E., Sec. Tercera, Sent. 20511, Nov 20/2008. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.)

Ahora, frente a las pretensiones individualmente consideradas, procedo a pronunciarme en detalle así.

FRENTE A LA PRIMERA: DECLÁRESE CIVILMENTE RESPONSABLES a los señores LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS Y LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEG0 por los daños causados al señor HECTOR ALEKCSI VILLALOBOS RODRIGUEZ, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), en la vía a Buenaventura, a la altura del Corregimiento de Mediacanoa – Yotoco Valle, por causa de la imprudencia del señor LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, identificado con la CC. No. 1114737042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS SRE115, el cual colisionó con el vehículo TRACTO CAMION de PLACAS TEK885, de propiedad de mi poderdante **ME OPONGO**, toda vez que no hay prueba dentro del proceso que acredite de forma certera y fehaciente una responsabilidad en cabeza de la parte pasiva de la acción en la ocurrencia del accidente citado, además, de no aportar elementos de prueba que sustenten las pretensiones incoadas.

Además, no es cierto que el hecho de tránsito se haya producido por la imprudencia del señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.114.737.042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS **SER-115**, teniendo en cuenta que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO**

VALENCIA GALLEGO, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana critica valorara en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso

Por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como 'onus probandi, incumbit actori' y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 167 del C.G.P. Correlativo a la carga del demandante, está así mismo el deber del demandado de probar los hechos que sustentan su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo 'reus, in excipiendo, fit actor'. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 165 C.G.P.

Habiéndose dicho todo lo anterior, tenemos que dentro del presente caso no existen los elementos de prueba necesarios para demostrar la responsabilidad del conductor del vehículo de placas **SER-115**, y de igual manera, de la parte pasiva de la acción, toda vez que la única prueba de la que se vale el apoderado de los demandantes, no constituye un elemento veraz de las circunstancias de rodearon el accidente y por ende no puede ser tenido por el despacho como prueba suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.

FRENTE A LA PRETENSION SEGUNDA: DECLÁRESE CIVILMENTE RESPONSABLES a las empresas GRUPO C.L.A.U. S.A.S. Sigla: GRUPO C.L.A.U. S.A.S., identificada con Nit. 900.869.631-2 y con domicilio en Yumbo Valle, representada legalmente por el señor KARIM PEREA PEREA, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la C.C.16.730.176, o por quien haga sus veces; y, TRANSPORTES ESPECIALES DEL VALLE S.A. - Sigla: TEVSA, con domicilio en Yumbo Valle e identificada con Nit.: 900.138.913-8, representada legalmente por el señor JAVIER TRUJILLO CUARTAS, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la CC. No. 16.352.504, ó por quien haga sus veces, en calidad de terceros civilmente responsables por las acciones de las personas que bajo su custodia conducen los vehículos tanto de su propiedad como los que se encuentran afiliados, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), en la vía a Buenaventura, a la altura del Corregimiento de Mediacanoa – Yotoco Valle, por causa de la imprudencia del señor LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, identificado con la CC. No. 1. 114.737.042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS SRE115, el cual colisionó con el vehículo TRACTO CAMION de PLACAS TEK885, de propiedad de mi poderdante **ME OPONGO**, toda vez que no hay prueba dentro del proceso que acredite de forma certera y fehaciente una responsabilidad en cabeza de la parte pasiva de la acción en la ocurrencia del accidente citado, además, de no aportar elementos de prueba que sustenten las pretensiones incoadas.

Además, no es cierto que el hecho de tránsito se haya producido por la imprudencia del señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.114.737.042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS **SER-115**, teniendo en cuenta que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana critica valorara en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso

Por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como 'onus probandi, incumbit actori' y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 167 del C.G.P. Correlativo a la carga del demandante, está así mismo el deber del demandado de probar los hechos que sustentan su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo 'reus, in excipiendo, fit actor'. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 165 C.G.P.

Habiéndose dicho todo lo anterior, tenemos que dentro del presente caso no existen los elementos de prueba necesarios para demostrar la responsabilidad del conductor del vehículo de placas **SER-115**, y de igual manera, de la parte pasiva de la acción, toda vez que la única prueba de la que se vale el apoderado de los demandantes, no constituye un elemento veraz de las circunstancias de rodearon el accidente y por ende no puede ser tenido por el despacho como prueba suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.

FRENTE A LA PRETENSION TERCERA: CONDENAR a los demandados a pagar a mi poderdante los perjuicios materiales – daño emergente y lucro cesante - por valor de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$28.972.627,00), correspondientes a los gastos en que tuvo que incurrir con ocasión del Accidente de tránsito ocurrido el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), en la vía a Buenaventura, a la altura del Corregimiento de Mediacanoa – Yotoco Valle, por causa de la imprudencia del señor LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, identificado con la CC. No. 1114737042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS SRE115, el cual colisionó con el vehículo TRACTO CAMION de PLACAS TEK885, de propiedad de mi poderdante. **ME OPONGO** a la totalidad de lo pretendido por la parte demandante, por cuanto carece de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, porque en el expediente no obra prueba alguna de la que se pueda siquiera inferir la responsabilidad que la parte actora pretende atribuirle al señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO (CONDUCTOR)**, a la **SOCIEDAD GRUPO C.L.A.U. S.A.S. Sigla: GRUPO C.L.A.U. S.A.S., (PROPIETARIO)**, y la compañía **MUNDIAL DE SEGUROS (ASEGURADORA)**, por los supuestos hechos y perjuicios alegados.

En este caso, no se reúnen los requisitos para que prosperen las pretensiones de la demanda, pues la culpa endilgada al señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO (CONDUCTOR)**, es inexistente y además entre la actividad y la conducta desplegada por este y el hecho, de que la parte actora afirma que se generó el perjuicio por el cual se pretende una indemnización no existe relación de causalidad.

Basta observar que los hechos aducidos por la parte actora no permiten ni siquiera inferir relación alguna de causalidad entre la actuación cumplida por el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO (CONDUCTOR)** y los supuestos perjuicios.

La parte actora presenta facturas que no cumplen con los requisitos de ley conforme al artículo 774 del Código de Comercio que enuncia:. Requisitos de la factura:

"La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada...".

Por lo anterior las facturas presentadas por la parte actora que no cumplan lo establecido en las normas del Código de Comercio no podrán valorarse como prueba.

Consecuentemente se está ante una insuficiencia de la prueba, de parte del que está encargado de producirla, arrojando como consecuencia la denegación de su pretensión. *Actore non probandi, reus absolvitur*. La prueba incumbe a la parte demandante; quien debe aportarla en su debida oportunidad para poder ser controvertida y evitar así que al demandado se le viole el derecho al debido proceso y de defensa. Por lo anterior se puede concluir que los demandantes no

han probado suficientemente su derecho, por lo tanto, sus pretensiones están infundadas.

Corolario de todo lo anterior, siendo menester hacer alusión a lo sostenido por el H. Consejo de Estado, así:

“(…) reitera la Sala que, por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como “onus probandi, incumbit actori” y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 de C.P.C. Correlativo a lo anterior, el demandado tiene el deber de probar los hechos que sustenta su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo ‘reus, in excipiendo, fit actor’. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 C.P.C.

De igual manera, el Honorable Consejo de Estado ha hecho varios pronunciamientos al respecto:

JURISPRUDENCIA. - Solo son indemnizables los daños ciertos. “Al respecto es oportuno recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, un daño cierto es aquel que consiste en un detrimento del patrimonio de quién lo sufre. Ahora bien, dicho detrimento puede ser pasado, presente o futuro, pero, en este último evento, es indispensable que no existan dudas sobre su ocurrencia. De ninguna manera son indemnizables los daños meramente eventuales, hipotéticos o posibles.” (C.E., Sec. Tercera, Sent. 2001-00489, mayo 3/2013. M.P. Danilo Rojas Betancourth).

JURISPRUDENCIA. –Responsabilidad del Estado. Certeza del perjuicio. “(…) los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman:

Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan solo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético. (C.E., Sec. Tercera, Sent. 20511, Nov 20/2008. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.)

Sin embargo, ante una improbable o eventual condena a mi poderdante, en caso de prosperar las pretensiones que se siguen en contra de los demandados que represento, la compañía de seguros **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** deberá responder según los amparos pactadas en la **PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL-AUTOMOVILES No. C 200013731, CERTIFICADO No. 1800305670** con vigencia desde el día 04/07/2020 - 24:00 horas, hasta el día 04/07/2021 - 00:00 horas, donde se estipula como tomador GRUPO CLAU S.A.S. con Nit 900869631 y asegurado GRUPO CLAU S.A.S. con Nit 900869631. Beneficiarios TERCEROS AFECTADOS y

cuyo valor asegurado por DAÑOS A BIENES DE TERCEROS es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000)** y LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000)**, con sus respectivos deducibles que se aprecian en la póliza.

FRENTE A LA PRETENSION CUARTA: CONDENAR a los demandados a pagar a mi poderdante los PERJUICIOS MORALES - por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 20.000.000,00), como consecuencia de la actuación lesiva de los demandados frente a mi representado quien se vio afectado en su integridad física y moral, por las lesiones de carácter permanente que le quedaron en su rostro, por la aflicción y dolor que le produjeron estas lesiones, con ocasión del Accidente de tránsito ocurrido el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), en la vía a Buenaventura, a la altura del Corregimiento de Mediacanoa – Yotoco Valle, por causa de la imprudencia del señor LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, identificado con la CC. No. 1114737042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS SRE115, el cual colisionó con el vehículo TRACTO CAMION de PLACAS TEK885, de propiedad de mi poderdante. **ME OPONGO A ESTA PRETENSIÓN**, pues a la inexistencia de la responsabilidad endilgada, se suma que los daños morales deben ser plenamente demostrados por quién los alegue.

En esta medida, el Juez sólo puede otorgarlos teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y racionalidad respecto a lo probado en el proceso. En este sentido, no basta simplemente con nombrar unas supuestas angustias o diversas circunstancias para pretender indemnización por este concepto, sino que es menester probar mediante los medios idóneos dicha afirmación, así como la magnitud de la alteración del estado emocional y psicológica de los afectados, resaltándose que en este caso, brillan por su ausencia tales elementos de convicción, y por tanto, al Juez no le queda otro camino más que desestimar las excesivas e infundadas pretensiones de la parte actora.

Además, es del caso anotar que cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones legales, que en éste ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de gran importancia.

El juez radica la facultad discrecional de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Discrecionalidad que está regida: a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, más no de restitución, ni de reparación; b) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 ; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto de perjuicio y su intensidad y por el d) deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.

Frente a los perjuicios extrapatrimoniales y específicamente en relación al daño moral, ha estimado la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, lo siguiente:

“4.2. Perjuicios extrapatrimoniales:

Tiene dicho la jurisprudencia de esta Corte que los daños extrapatrimoniales no se circunscriben al daño moral, pues dentro del conjunto de bienes no pecuniarios que pueden resultar afectados mediante una conducta antijurídica se encuentran comprendidos intereses distintos a la aflicción, el dolor o la tristeza que un hecho dañoso produce en las víctimas.

En ese orden, son especies de perjuicio no patrimonial, además del moral, el daño a la vida de relación y la lesión a bienes jurídicos de especial protección constitucional o convencional.

La característica fundamental de esta clase de daños es que son económicamente inestimables, pues no corresponden a costos o gastos sufragados, ni a beneficios pecuniarios legítimamente esperados, aunque sí tienen un valor para su titular. Es decir que el criterio diferenciador frente a los daños patrimoniales proviene de la distinción conceptual que la ciencia económica ha establecido entre costo, precio y valor: el costo son los gastos de producción, conservación y comercialización de un bien o servicio; el precio es la estimación en dinero que los bienes materiales o servicios tienen en el mercado; mientras que el valor es la medida o estimación subjetiva que las personas otorgan a sus bienes materiales o inmateriales.

Por ello, el daño a la integridad psicofísica de la persona no puede confundirse con los gastos correspondientes a la atención en salud que debe recibir un paciente para la recuperación o mantenimiento de su vitalidad, pues estos últimos corresponden a un servicio que tiene un costo; mientras que la salud como bien superior no tiene precio sino valor, y la medida de compensación o satisfacción que se otorga es siempre simbólica (sea monetaria o de cualquier otra índole).

La tasación de los daños no patrimoniales está dada por el criterio de razonabilidad del juez, pues esta noción intelectual le permite determinar en cada caso concreto si la medida simbólica compensatoria es equitativa, suficiente, necesaria y adecuada para consolar a la víctima por la pérdida de sus bienes inmateriales e inestimables en dinero, como son su integridad psicofísica, su honra y buen nombre, su dignidad, su proyecto de vida, o sus sentimientos o afectos."

En este orden de ideas, solicito al despacho que en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda, la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales se realice de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho lo precedente, es claro que el caso, no se acreditaron los presupuestos necesarios para acceder al mismo. En efecto, no existe ninguna presunción que opere en favor de la parte demandante que permita emitir una condena por la sola enunciación de un aparente perjuicio.

Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia¹¹ ha manifestado claramente:

"Señálese que, con el fin de evitar antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, la determinación del daño en comentario debe atender a las «las condiciones personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio» (SC5885, 6 may. 2016, rad. n.º 2004-00032-01), aspectos todos ausentes de prueba en la foliatura. Incluso, desde el libelo genitor, en que se suplicó el pago del daño a la vida de relación sufrido a raíz del accidente de tránsito (folio 26), se advierte una falta absoluta de sustrato fáctico para soportar esta pretensión, pues el actor se limitó a señalar que encuentra postrado en una silla de ruedas (folio 27), sin mencionar sus condiciones personales -edad, deportes realizados, aficiones, nivel de vida y de sociabilización-, o las actividades sociales, culturales, recreativas o familiares

que dejó de realizar después del accidente, que permitieran establecer la existencia del perjuicio causado.(...)

En consecuencia, ante la ausencia de certeza sobre la forma en que se torpedeó la interacción social del demandante, resulta inviable acceder a una condena por este aspecto, ya que para esto habría que hacer juicios hipotéticos que impiden la configuración del deber de reparar. (Negrilla fuera del texto original)”

Frente al perjuicio de la vida en relación, este perjuicio se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”.

En los casos como el presente corresponde a la parte actora la carga de demostrar los supuestos de hecho y los presuntos perjuicios, que afirma en la demanda, tal como lo establece el artículo 167 del C.G.P.

Consecuentemente se está ante una insuficiencia de la prueba, de parte del que está encargado de producirla, arrojando como consecuencia la denegación de su pretensión. *Actore non probante, reus absolvitur*. La prueba incumbe a la parte demandante; quien debe aportarla en su debida oportunidad para poder ser controvertida y evitar así que el demandado se le viole el derecho al debido proceso y de defensa. Por lo anterior se puede concluir que el demandante que no ha probado suficientemente su derecho, está infundado en su pretensión.

Corolario de todo lo anterior, siendo menester hacer alusión a lo sostenido por el H. Consejo de Estado, así:

“(…) reitera la Sala que, por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como “onus probandi, incumbit actori” y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 de C.P.C. Correlativo a lo anterior, el demandado tiene el deber de probar los hechos que sustenta su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo ‘reus, in excipiendo, fit actor’. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 C.P.C.

En este caso, hay principalmente ausencia de prueba frente a la configuración del daño, como elemento determinante de la responsabilidad de los aquí demandados.

Corresponde en mi opinión dirimir tal conflicto a Usted Señor Juez, y sobre esa línea de principio a quien yo represento estaría al margen de cualquier condena.

Por otra parte, en el derecho colombiano prima el principio universal de la carga de la prueba, conforme al cual quién alegue un hecho del que pretenda derivar consecuencias jurídicas y/o económicas, debe comprobar su realización. Es por eso que, en materia de responsabilidad civil, quién demanda una indemnización, debe probar que se reúnen los requisitos que conforman esa clase de vínculo jurídico, estos son el hecho, la culpa o dolo, el daño o perjuicio y la imprescindible relación de causalidad entre el primero y éste último.

Los perjuicios deben ser debidamente probados y soportados dentro del proceso de acuerdo a los artículos 1613, 1614 del C.C.; artículo 97 del C.P.P.

Sin embargo, ante una improbable o eventual condena a mi poderdante, en caso de prosperar las pretensiones que se siguen en contra de los demandados que represento, la compañía de seguros **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** deberá responder según los amparos pactadas en la **PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-AUTOMOVILES No. C 200013731, CERTIFICADO No. 1800305670** con vigencia desde el día 04/07/2020 - 24:00 horas, hasta el día 04/07/2021 - 00:00 horas, donde se estipula como tomador GRUPO CLAU S.A.S. con Nit 900869631 y asegurado GRUPO CLAU S.A.S. con Nit 900869631. Beneficiarios TERCEROS AFECTADOS y cuyo valor asegurado por DAÑOS A BIENES DE TERCEROS es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000)** y LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000)**, con sus respectivos deducibles que se aprecian en la póliza.

FRENTE A LA PRETENSION QUINTA.- CONDENAR a los demandados a pagar a la señora KENLLY CAROLINA HERRERA MEDINA, cónyuge del señor HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS RODRIGUEZ, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$10.000.000,00), en calidad de PERJUICIOS MORALES, por la aflicción y dolor que le produjo las lesiones de su esposo, la angustia que le produjo estar al frente de las diligencias médicas de su esposo, vivir la situación de angustia que se produjo el entorno familiar por las lesiones físicas y emocionales sufridas por su cónyuge, con ocasión del Accidente de tránsito ocurrido el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), en la vía a Buenaventura, a la altura del Corregimiento de Mediacanoa – Yotoco Valle, por causa de la imprudencia del señor LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, identificado con la CC. No. 1114737042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS SRE115, el cual colisionó con el vehículo TRACTO CAMION de PLACAS TEK885, de propiedad de mi poderdante. **ME OPONGO A ESTA PRETENSIÓN**, pues a la inexistencia de la responsabilidad endilgada, se suma que los daños morales deben ser plenamente demostrados por quién los alegue.

En esta medida, el Juez sólo puede otorgarlos teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y racionalidad respecto a lo probado en el proceso. En este sentido, no basta simplemente con nombrar unas supuestas angustias o diversas circunstancias para pretender indemnización por este concepto, sino que es menester probar mediante los medios idóneos dicha afirmación, así como la magnitud de la alteración del estado emocional y psicológica de los afectados, resaltándose que en este caso, brillan por su ausencia tales elementos de convicción, y por tanto, al Juez no le queda otro camino más que desestimar las excesivas e infundadas pretensiones de la parte actora.

Además, es del caso anotar que cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones legales, que en éste ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de gran importancia.

El juez radica la facultad discrecional de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Discrecionalidad que está regida: a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, más no de restitución, ni de reparación; b) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 ; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto de perjuicio y su intensidad y por el d) deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.

Frente a los perjuicios extrapatrimoniales y específicamente en relación al daño moral, ha estimado la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, lo siguiente:

“4.2. Perjuicios extrapatrimoniales:

Tiene dicho la jurisprudencia de esta Corte que los daños extrapatrimoniales no se circunscriben al daño moral, pues dentro del conjunto de bienes no pecuniarios que pueden resultar afectados mediante una conducta antijurídica se encuentran comprendidos intereses distintos a la aflicción, el dolor o la tristeza que un hecho dañoso produce en las víctimas.

En ese orden, son especies de perjuicio no patrimonial, además del moral, el daño a la vida de relación y la lesión a bienes jurídicos de especial protección constitucional o convencional.

La característica fundamental de esta clase de daños es que son económicamente inestimables, pues no corresponden a costos o gastos sufragados, ni a beneficios pecuniarios legítimamente esperados, aunque sí tienen un valor para su titular. Es decir que el criterio diferenciador frente a los daños patrimoniales proviene de la distinción conceptual que la ciencia económica ha establecido entre costo, precio y valor: el costo son los gastos de producción, conservación y comercialización de un bien o servicio; el precio es la estimación en dinero que los bienes materiales o servicios tienen en el mercado; mientras que el valor es la medida o estimación subjetiva que las personas otorgan a sus bienes materiales o inmateriales.

Por ello, el daño a la integridad psicofísica de la persona no puede confundirse con los gastos correspondientes a la atención en salud que debe recibir un paciente para la recuperación o mantenimiento de su vitalidad, pues estos últimos corresponden a un servicio que tiene un costo; mientras que la salud como bien superior no tiene precio sino valor, y la medida de compensación o satisfacción que se otorga es siempre simbólica (sea monetaria o de cualquier otra índole).

La tasación de los daños no patrimoniales está dada por el criterio de razonabilidad del juez, pues esta noción intelectual le permite determinar en cada caso concreto si la medida simbólica compensatoria es equitativa, suficiente, necesaria y adecuada para consolar a la víctima por la pérdida de sus bienes inmateriales e inestimables en dinero, como son su integridad psicofísica, su honra y buen nombre, su dignidad, su proyecto de vida, o sus sentimientos o afectos.”

En este orden de ideas, solicito al despacho que en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda, la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales se realice de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho lo precedente, es claro que el caso, no se acreditaron los presupuestos necesarios para acceder al mismo. En efecto, no existe ninguna presunción que

opere en favor de la parte demandante que permita emitir una condena por la sola enunciación de un aparente perjuicio.

Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia¹¹ ha manifestado claramente:

*"Señálese que, con el fin de evitar antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, la determinación del daño en comentario debe atender a las «las condiciones personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio» (SC5885, 6 may. 2016, rad. n.º 2004-00032-01), aspectos todos ausentes de prueba en la foliatura. Incluso, **desde el libelo genitor, en que se suplicó el pago del daño a la vida de relación sufrido a raíz del accidente de tránsito (folio 26), se advierte una falta absoluta de sustrato fáctico para soportar esta pretensión, pues el actor se limitó a señalar que encuentra postrado en una silla de ruedas (folio 27), sin mencionar sus condiciones personales -edad, deportes realizados, aficiones, nivel de vida y de sociabilización-, o las actividades sociales, culturales, recreativas o familiares que dejó de realizar después del accidente, que permitieran establecer la existencia del perjuicio causado.(...)***

En consecuencia, ante la ausencia de certeza sobre la forma en que se torpedeó la interacción social del demandante, resulta inviable acceder a una condena por este aspecto, ya que para esto habría que hacer juicios hipotéticos que impiden la configuración del deber de reparar. (Negrilla fuera del texto original)"

Frente al perjuicio de la vida en relación, este perjuicio se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada".

En los casos como el presente corresponde a la parte actora la carga de demostrar los supuestos de hecho y los presuntos perjuicios, que afirma en la demanda, tal como lo establece el artículo 167 del C.G.P.

Consecuentemente se está ante una insuficiencia de la prueba, de parte del que está encargado de producirla, arrojando como consecuencia la denegación de su pretensión. *Actore non probante, reus absolvitur*. La prueba incumbe a la parte demandante; quien debe aportarla en su debida oportunidad para poder ser controvertida y evitar así que el demandado se le viole el derecho al debido proceso y de defensa. Por lo anterior se puede concluir que el demandante que no ha probado suficientemente su derecho, está infundado en su pretensión.

Corolario de todo lo anterior, siendo menester hacer alusión a lo sostenido por el H. Consejo de Estado, así:

"(...) reitera la Sala que, por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como "onus probandi, incumbit actori" y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 de C.P.C. Correlativo a lo anterior, el demandado tiene el deber de probar los hechos que sustenta su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo 'reus, in excipiendo, fit actor'. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 C.P.C.

En este caso, hay principalmente ausencia de prueba frente a la configuración del daño, como elemento determinante de la responsabilidad de los aquí demandados.

Corresponde en mi opinión dirimir tal conflicto a Usted Señor Juez, y sobre esa línea de principio a quien yo represento estaría al margen de cualquier condena.

Por otra parte, en el derecho colombiano prima el principio universal de la carga de la prueba, conforme al cual quién alegue un hecho del que pretenda derivar consecuencias jurídicas y/o económicas, debe comprobar su realización. Es por eso que, en materia de responsabilidad civil, quién demanda una indemnización, debe probar que se reúnen los requisitos que conforman esa clase de vínculo jurídico, estos son el hecho, la culpa o dolo, el daño o perjuicio y la imprescindible relación de causalidad entre el primero y éste último.

Los perjuicios deben ser debidamente probados y soportados dentro del proceso de acuerdo a los artículos 1613, 1614 del C.C.; artículo 97 del C.P.P.

Sin embargo, ante una improbable o eventual condena a mi poderdante, en caso de prosperar las pretensiones que se siguen en contra de los demandados que represento, la compañía de seguros **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** deberá responder según los amparos pactadas en la **PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-AUTOMOVILES No. C 200013731, CERTIFICADO No. 1800305670** con vigencia desde el día 04/07/2020 - 24:00 horas, hasta el día 04/07/2021 - 00:00 horas, donde se estipula como tomador GRUPO CLAU S.A.S. con Nit 900869631 y asegurado GRUPO CLAU S.A.S. con Nit 900869631. Beneficiarios TERCEROS AFECTADOS y cuyo valor asegurado por DAÑOS A BIENES DE TERCEROS es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000)** y LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000)**, con sus respectivos deducibles que se aprecian en la póliza.

FRENTE A LA PRETENSION SEXTA.- CONDENAR a los demandados a pagar al menor OMAR ALEXIS VILLOBO HERRERA, representado por sus padres HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS y KENLLY CAROLINA HERRERA, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$5.000.000,00), en calidad de PERJUICIOS MORALES por la aflicción causada al menor por la noticia del accidente de su padre y vivir la situación de angustia que se produjo el entorno familiar por las lesiones físicas y emocionales sufridas por su padre, con ocasión del Accidente de tránsito ocurrido el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), en la vía a Buenaventura, a la altura del Corregimiento de Mediacanoa – Yotoco Valle, por causa de la imprudencia del señor LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, identificado con la CC. No. 1114737042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS SRE115, el cual colisionó con el vehículo TRACTO CAMION de PLACAS TEK885, de propiedad de mi poderdante. **ME OPONGO A ESTA PRETENSIÓN**, pues a la inexistencia de la responsabilidad endilgada, se suma que los daños morales deben ser plenamente demostrados por quién los alegue.

En esta medida, el Juez sólo puede otorgarlos teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y racionalidad respecto a lo probado en el proceso. En este sentido, no basta simplemente con nombrar unas supuestas angustias o diversas circunstancias para pretender indemnización por este concepto, sino que es menester probar mediante los medios idóneos dicha afirmación, así como la magnitud de la alteración del estado emocional y psicológica de los afectados,

resaltándose que en este caso, brillan por su ausencia tales elementos de convicción, y por tanto, al Juez no le queda otro camino más que desestimar las excesivas e infundadas pretensiones de la parte actora.

Además, es del caso anotar que cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones legales, que en éste ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de gran importancia.

El juez radica la facultad discrecional de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Discrecionalidad que está regida: a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, más no de restitución, ni de reparación; b) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 ; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto de perjuicio y su intensidad y por el d) deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.

Frente a los perjuicios extrapatrimoniales y específicamente en relación al daño moral, ha estimado la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, lo siguiente:

"4.2. Perjuicios extrapatrimoniales:

Tiene dicho la jurisprudencia de esta Corte que los daños extrapatrimoniales no se circunscriben al daño moral, pues dentro del conjunto de bienes no pecuniarios que pueden resultar afectados mediante una conducta antijurídica se encuentran comprendidos intereses distintos a la aflicción, el dolor o la tristeza que un hecho dañoso produce en las víctimas.

En ese orden, son especies de perjuicio no patrimonial, además del moral, el daño a la vida de relación y la lesión a bienes jurídicos de especial protección constitucional o convencional.

La característica fundamental de esta clase de daños es que son económicamente inestimables, pues no corresponden a costos o gastos sufragados, ni a beneficios pecuniarios legítimamente esperados, aunque sí tienen un valor para su titular. Es decir que el criterio diferenciador frente a los daños patrimoniales proviene de la distinción conceptual que la ciencia económica ha establecido entre costo, precio y valor: el costo son los gastos de producción, conservación y comercialización de un bien o servicio; el precio es la estimación en dinero que los bienes materiales o servicios tienen en el mercado; mientras que el valor es la medida o estimación subjetiva que las personas otorgan a sus bienes materiales o inmateriales.

Por ello, el daño a la integridad psicofísica de la persona no puede confundirse con los gastos correspondientes a la atención en salud que debe recibir un paciente para la recuperación o mantenimiento de su vitalidad, pues estos últimos corresponden a un servicio que tiene un costo; mientras que la salud como bien superior no tiene precio sino valor, y la medida de compensación o satisfacción que se otorga es siempre simbólica (sea monetaria o de cualquier otra índole).

La tasación de los daños no patrimoniales está dada por el criterio de razonabilidad del juez, pues esta noción intelectual le permite determinar en cada caso concreto si la medida simbólica compensatoria es equitativa, suficiente, necesaria y adecuada para

consolar a la víctima por la pérdida de sus bienes inmateriales e inestimables en dinero, como son su integridad psicofísica, su honra y buen nombre, su dignidad, su proyecto de vida, o sus sentimientos o afectos."

En este orden de ideas, solicito al despacho que en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda, la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales se realice de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho lo precedente, es claro que el caso, no se acreditaron los presupuestos necesarios para acceder al mismo. En efecto, no existe ninguna presunción que opere en favor de la parte demandante que permita emitir una condena por la sola enunciación de un aparente perjuicio.

Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia¹¹ ha manifestado claramente:

*"Señálese que, con el fin de evitar antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, la determinación del daño en comentario debe atender a las «las condiciones personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio» (SC5885, 6 may. 2016, rad. n.º 2004-00032-01), aspectos todos ausentes de prueba en la foliatura. Incluso, **desde el libelo genitor, en que se suplicó el pago del daño a la vida de relación sufrido a raíz del accidente de tránsito (folio 26), se advierte una falta absoluta de sustrato fáctico para soportar esta pretensión, pues el actor se limitó a señalar que encuentra postrado en una silla de ruedas (folio 27), sin mencionar sus condiciones personales -edad, deportes realizados, aficiones, nivel de vida y de sociabilización-, o las actividades sociales, culturales, recreativas o familiares que dejó de realizar después del accidente, que permitieran establecer la existencia del perjuicio causado.(...)***

En consecuencia, ante la ausencia de certeza sobre la forma en que se torpedeó la interacción social del demandante, resulta inviable acceder a una condena por este aspecto, ya que para esto habría que hacer juicios hipotéticos que impiden la configuración del deber de reparar. (Negrilla fuera del texto original)"

Frente al perjuicio de la vida en relación, este perjuicio se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada".

En los casos como el presente corresponde a la parte actora la carga de demostrar los supuestos de hecho y los presuntos perjuicios, que afirma en la demanda, tal como lo establece el artículo 167 del C.G.P.

Consecuentemente se está ante una insuficiencia de la prueba, de parte del que está encargado de producirla, arrojando como consecuencia la denegación de su pretensión. *Actore non probante, reus absolvitur*. La prueba incumbe a la parte demandante; quien debe aportarla en su debida oportunidad para poder ser controvertida y evitar así que el demandado se le viole el derecho al debido proceso y de defensa. Por lo anterior se puede concluir que el demandante que no ha probado suficientemente su derecho, está infundado en su pretensión.

Corolario de todo lo anterior, siendo menester hacer alusión a lo sostenido por el H. Consejo de Estado, así:

"(...) reitera la Sala que, por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como "onus probandi, incumbit actori" y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 de C.P.C. Correlativo a lo anterior, el demandado tiene el deber de probar los hechos que sustenta su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo 'reus, in excipiendo, fit actor'. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 C.P.C.

En este caso, hay principalmente ausencia de prueba frente a la configuración del daño, como elemento determinante de la responsabilidad de los aquí demandados.

Corresponde en mi opinión dirimir tal conflicto a Usted Señor Juez, y sobre esa línea de principio a quien yo represento estaría al margen de cualquier condena.

Por otra parte, en el derecho colombiano prima el principio universal de la carga de la prueba, conforme al cual quién alegue un hecho del que pretenda derivar consecuencias jurídicas y/o económicas, debe comprobar su realización. Es por eso que, en materia de responsabilidad civil, quién demanda una indemnización, debe probar que se reúnen los requisitos que conforman esa clase de vínculo jurídico, estos son el hecho, la culpa o dolo, el daño o perjuicio y la imprescindible relación de causalidad entre el primero y éste último.

Los perjuicios deben ser debidamente probados y soportados dentro del proceso de acuerdo a los artículos 1613, 1614 del C.C.; artículo 97 del C.P.P.

Sin embargo, ante una improbable o eventual condena a mi poderdante, en caso de prosperar las pretensiones que se siguen en contra de los demandados que represento, la compañía de seguros **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** deberá responder según los amparos pactadas en la **PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL-AUTOMOVILES No. C 200013731, CERTIFICADO No. 1800305670** con vigencia desde el día 04/07/2020 - 24:00 horas, hasta el día 04/07/2021 - 00:00 horas, donde se estipula como tomador GRUPO CLAU S.A.S. con Nit 900869631 y asegurado GRUPO CLAU S.A.S. con Nit 900869631. Beneficiarios TERCEROS AFECTADOS y cuyo valor asegurado por DAÑOS A BIENES DE TERCEROS es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000)** y LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000)**, con sus respectivos deducibles que se aprecian en la póliza.

FRENTE A LA PRETENSION SEPTIMA. - DECLARAR que las aseguradoras MUNDIAL DE SEGUROS y LA EQUIDAD SEGUROS O.C., deben pagar a mi representado el valor correspondiente a los perjuicios materiales y morales, bajo la cobertura de las pólizas correspondientes. **ME OPONGO FRENTE A LA CONDENA RESPECTO DE MUNDIAL DE SEGUROS** a que prosperen las pretensiones declarativas y de condena solicitadas por la parte actora en su escrito de demanda, puesto que las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, como quiera que los demandantes pretenden el pago de indemnizaciones de orden material y extrapatrimonial, sin que una obligación de esa índole hubiere nacido en cabeza de los demandados, entre otras

razones, porque en materia de indemnización de perjuicios, el daño y la cuantía del mismo deben estar plenamente comprobados, asunto que no ocurre en el presente caso.

En este caso, no se reúnen los requisitos para que prosperen las pretensiones de la demanda, pues la culpa endilgada al señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, supuesto conductor del vehículo de placas SER-115**, es inexistente, toda vez que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica valorara en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso y además entre la actividad y la conducta desplegada por este y el hecho, de que la parte actora afirma que se generó el perjuicio por el cual se pretende una indemnización no existe relación de causalidad.

Consecuentemente se está ante una insuficiencia de la prueba, de parte del que está encargado de producirla, arrojando como consecuencia la denegación de su pretensión. *Actore non probandi, reus absolvitur*. La prueba incumbe a la parte demandante; quien debe aportarla en su debida oportunidad para poder ser controvertida y evitar así que a los demandados se les viole el derecho al debido proceso y defensa. Por lo anterior se puede concluir que los demandantes no han probado suficientemente su derecho y por ende están infundado en su pretensión.

Corolario de todo lo anterior, siendo menester hacer alusión a lo sostenido por el H. Consejo de Estado, así:

"(...) reitera la Sala que, por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como "onus probandi, incumbit actori" y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 de C.P.C. Correlativo a lo anterior, el demandado tiene el deber de probar los hechos que sustenta su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo 'reus, in excipiendo, fit actor'. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 C.P.C.

De igual manera, el Honorable Consejo de Estado ha hecho varios pronunciamientos al respecto:

JURISPRUDENCIA. - Solo son indemnizables los daños ciertos. "Al respecto es oportuno recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, un daño cierto es aquel que consiste en un detrimento del patrimonio de quién lo sufre. Ahora bien, dicho detrimento puede ser pasado, presente o futuro, pero, en este último evento, es indispensable que no existan dudas sobre su ocurrencia. De ninguna manera son indemnizables los daños meramente eventuales, hipotéticos o

posibles.” (C.E., Sec. Tercera, Sent. 2001-00489, mayo 3/2013. M.P. Danilo Rojas Betancourth).

JURISPRUDENCIA. –**Responsabilidad del Estado. Certeza del perjuicio.** “(...) los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman:

Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan solo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético. (C.E., Sec. Tercera, Sent. 20511, Nov 20/2008. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.)

FRENTE A LA PRETENSION OCTAVA. - CONDENAR a la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS, a pagar a mi representado el valor correspondiente a los intereses moratorios desde el dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021), tasados conforme al certificado de los intereses bancarios corrientes emitido por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad, teniendo en cuenta que cumplió con lo requerido en el Art. 1080. Inc. 1o. -Modificado por la Ley 510 de 1999, art. 111, y las Aseguradoras MUNDIAL DE SEGUROS y LA EQUIDAD SEGUROS O.C. se negaron a pagar el siniestro. **ME OPONGO** a que prosperen las pretensiones solicitadas por la parte actora en su escrito de demanda, puesto que las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, como quiera que los demandantes pretenden el pago de indemnizaciones de orden material y extrapatrimonial, sin que una obligación de esa índole hubiere nacido en cabeza de los demandados, entre otras razones, porque en materia de indemnización de perjuicios, el daño y la cuantía del mismo deben estar plenamente comprobados, asunto que no ocurre en el presente caso.

En este caso, no se reúnen los requisitos para que prosperen las pretensiones de la demanda, pues la culpa endilgada al señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, supuesto conductor del vehículo de placas SER-115**, es inexistente, toda vez que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEG0**, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEG0. 8.2 PLACAS SER-115**

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana critica valorara en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso y además entre la actividad y la conducta desplegada por este y el hecho, de que la parte actora afirma que se generó el perjuicio por el cual se pretende una indemnización no existe relación de causalidad.

FRENTE A LA PRETENSION NOVENA. - CONDENAR. ME OPONGO a que prosperen las pretensiones solicitadas por la parte actora en su escrito de demanda, puesto que las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, como quiera que los demandantes pretenden el pago de indemnizaciones de orden material y extrapatrimonial, sin que una obligación de esa índole hubiere nacido en cabeza de los demandados, entre otras razones, porque en materia de indemnización de perjuicios, el daño y la cuantía del mismo deben estar plenamente comprobados, asunto que no ocurre en el presente caso.

En este caso, no se reúnen los requisitos para que prosperen las pretensiones de la demanda, pues la culpa endilgada al señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, supuesto conductor del vehículo de placas SER-115**, es inexistente, toda vez que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana critica valorara en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso y además entre la actividad y la conducta desplegada por este y el hecho, de que la parte actora afirma que se generó el perjuicio por el cual se pretende una indemnización no existe relación de causalidad.

FRENTE A LA PRETENSION DÉCIMA. - CONDENAR a los demandados a pagar las sumas de dinero que en exceso no puedan ser cubiertas por las pólizas de riesgos de las aseguradoras MUNDIAL DE SEGUROS y LA EQUIDAD SEGUROS O.C. correspondientes a los perjuicios materiales y morales decretados a favor de mis representados. **ME OPONGO** a que prosperen las pretensiones solicitadas por la parte actora en su escrito de demanda, puesto que las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, como quiera que los demandantes pretenden el pago de indemnizaciones de orden material y extrapatrimonial, sin que una obligación de esa índole hubiere nacido en cabeza de los demandados, entre otras razones, porque en materia de indemnización de perjuicios, el daño y la cuantía del mismo deben estar plenamente comprobados, asunto que no ocurre en el presente caso.

En este caso, no se reúnen los requisitos para que prosperen las pretensiones de la demanda, pues la culpa endilgada al señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS, supuesto conductor del vehículo de placas SER-115**, es inexistente, toda vez que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana critica valorara en conjunto todas

las pruebas que se practiquen dentro del proceso y además entre la actividad y la conducta desplegada por este y el hecho, de que la parte actora afirma que se generó el perjuicio por el cual se pretende una indemnización no existe relación de causalidad.

FRENTE A LA PRETENSION DÉCIMA PRIMERA. - CONDENAR a los Demandados a pagar las costas y costos del presente proceso. **ME OPONGO** y por el contrario, solicitamos de manera respetuosa al despacho que condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante, toda vez que al no encontrar fundamentos jurídicos ni fácticos para endilgarle obligación alguna a los demandados, de ninguna manera puede pretenderse con éxito que prospere una condena adicional por el concepto solicitado y, en esa medida, solicito en su lugar que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

Por no asistírle razón jurídica a la parte demandante, niego y me opongo al derecho que pretenda invocar como fundamento de las pretensiones.

En este orden de cosas, es claro, como lo sostuvo el profesor Valencia Zea y lo ha recogido la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, que en los eventos en que existen diferentes causas de un daño, el compromiso de la responsabilidad solo se podrá predicar respecto de quien genera la condición o causa que efectivamente lo produce y por eso la responsabilidad civil/ administrativa, no puede deducirse si no cuando proviene y se demuestra que fue generada por el imputado.

“En relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012, unifico su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al Juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la Sentencia. En este sentido se expuso: “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegia ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del Juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al Juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del Juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del

Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia". (C.E., Sec. Tercera, Sent. 2000-00389, abr. 13/2013. M.P. Hernán Andrade Rincón)

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

A efecto de que sean consideradas por el Honorable Juez, propongo las siguientes excepciones:

PRIMERA EXCEPCION: COBRO DE LO NO DEBIDO

La culpa del hecho es imputable a un tercero, de ahí que mi representado señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO (CONDUCTOR)**, no están obligado a realizar indemnización alguna bajo ningún fundamento jurídico, porque no han causado daño alguno y mucho menos contribuyo a su agravación.

De acuerdo con el Informe Policial de Accidentes de Tránsito, se da la ocurrencia de un accidente de tránsito el 24 de julio de 2020, en la vía a Buenaventura, a la altura del Corregimiento de Mediacanoa – Yotoco Valle. No es cierto que el mismo se haya producido por la imprudencia del señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.114.737.042, quien venía conduciendo el vehículo tipo camión de PLACAS **SER-115**, teniendo en cuenta que el conductor del mencionado rodante para la fecha de los hechos era el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO**, tal como quedo plasmado en el Informe Policial de Accidentes de Transito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**

Las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y, por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana critica valorara en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso.

Habiéndose dicho todo lo anterior, tenemos que dentro del presente caso no existen los elementos de prueba necesarios para demostrar la responsabilidad del conductor del vehículo de placas **SER-115**, y de igual manera, de la parte pasiva de la acción, toda vez que la única prueba de la que se vale el apoderado de los demandantes, no constituye un elemento veraz de las circunstancias de rodearon el accidente y por ende no puede ser tenido por el despacho como prueba suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.

De acuerdo al tratado **TECNICO- JURIDICO SOBRE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y MATERIAS AFINES, OCTAVA EDICIÓN DEL DOCTOR CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA**, en su página 102, Literal C. **CONCURSO DE LA VICTIMA DEL DAÑO**

Otra causa que puede excluir o reducir la responsabilidad por culpa, es el concurso de la víctima del daño.

Este concurso puede asumir el carácter de cooperación culposa cuando hay un encuentro de voluntades en la conducta ilícita de la cual proviene el daño, como en

el caso de la persona que confía el manejo de su carro a un sujeto no idóneo para tal fin, o el de quien da a otro la conducción de un vehículo sabiendo que éste adolece de fallas en órganos mecánicos fundamentales y a consecuencia de esto ocurre un accidente.

Existe, por el contrario, otra figura cuya esencia es el concurso de culpa de varias personas, en la cual las causas obran independientemente la una de la otra, no obstante, su confluencia en la producción del evento. En tal caso puede concurrir la culpa del tercero o la culpa de quien ha sufrido el daño, o la de ambos.

De la primera ya hemos dicho algo. Nos queda por aludir al concurso de culpa del sujeto pasivo del daño, respecto del cual existen dos hipótesis: la primera, cuando la culpa de la víctima es causa exclusiva del evento dañoso; la segunda, cuando la culpa de ésta es solo causa concurrente.

La primera hipótesis se presenta cuando la culpa del sujeto perjudicado interfiere de tal manera el proceso causal puesto en movimiento por el sujeto activo del daño, que se interrumpe el nexo de causalidad entre el comportamiento de éste y el evento, sustituyéndolo por completo. En tal caso la responsabilidad no puede ponerse a cargo del damnificador, porque en realidad él no es autor del daño, sino la propia víctima que con su comportamiento fue su causa efectiva y real.

Con base en el artículo 2341 del C.C., es responsable del daño la persona que con su propia conducta lo produce, pero esto requiere un nexo de causalidad material y psíquica entre el evento y el sujeto que obra, lo cual no se presenta en el caso que nos ocupa, en cuanto el evento dañoso, si bien lo ha cometido materialmente el conductor del vehículo, la culpa no puede cargarse a su cuenta sino a la exclusiva del sujeto perjudicado.

(...)

(Negrilla fuera de texto)

La demandada se libera de responsabilidad cuando el daño es producido por fuerza mayor, caso fortuito, intervención de un tercero o culpa de la propia víctima.

A la parte demandante le corresponde probar que el daño sufrido por estos fue el comportamiento ilícito del agente, es decir, que éste último, por sí mismo o por interpuesta persona, cosa o actividad, bajo su responsabilidad, causó el perjuicio. Por lo anterior esta excepción está llamada a prosperar.

Por lo anterior esta excepción está llamada a prosperar.

SEGUNDA EXCEPCION: INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Es sabido que para que exista la responsabilidad se requiere de tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa-

efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.

El nexo de causalidad es un elemento autónomo del daño y del fundamento que no admite ningún tipo de presunción como sí lo admite la culpa o la falla. Para comprender lo antes mencionado, corresponde a la constatación objetiva de una relación natural de causa y efecto, mientras que la culpabilidad como fundamento, se refiere a la valoración subjetiva de una conducta. Al día de hoy, el Consejo de Estado junto con la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia ha manifestado, que el nexo de causalidad, debe ser probado en todos los casos.

Al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado sobre este elemento para configurar responsabilidad, en los siguientes términos:

"Si de lo que se trata es de establecer el nexo de causalidad que puede existir entre dos hechos debidamente probados en el proceso, entonces el eventual error en la formulación del enunciado fáctico sólo puede ser de hecho y jamás de derecho, dado que no hay ninguna disposición en el ordenamiento civil que indique la manera en que debe inferirse la relación de causalidad; tal labor se reitera en que es una operación del entendimiento humano. En el mismo sentido se han pronunciado la jurisprudencia y la doctrina extranjeras, al considerar que la determinación de la causa del daño y si entre éste y el hecho ilícito existe o no esa relación, es una cuestión de hecho que los jueces de fondo establecen por medio de su razonamiento que a tal conclusión conlleve, aunque pueda resultar contraevidente".

Es necesario que exista una relación de causa efecto, en otras palabras, de antecedente -consecuencia entre la conducta culposa y el daño causado-, pues de lo contrario no hay lugar a una responsabilidad y no nacerá la obligación de indemnizar, lo cual significa que el daño causado debe ser consecuencia de la conducta antijurídica a fin de que se configure un supuesto de responsabilidad civil/administrativa tanto de carácter contractual como extracontractual.

Por último, es la relación de causalidad un requisito indispensable de la responsabilidad, el hecho causal se escinde o rompe cuando se dan tres fenómenos o causa ajena cuya imputabilidad no es de resorte del presunto responsable, así:

- Hecho de la víctima.
- Fuerza mayor y caso fortuito.
- Hecho de un tercero.

A los demandantes les incumbe probar esa relación de causalidad o, en otros términos, debe demostrar los hechos donde se desprende aquella".

Tanto la culpa como los perjuicios deben ser claramente probados y soportados dentro del proceso, lo anterior de acuerdo a los artículos 167 del C.G.P. y 97 del C. P.

En este orden de cosas, es claro, como lo sostuvo el profesor Valencia Zea y lo ha recogido la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, que en los eventos en que existen diferentes causas de un daño, el compromiso de la responsabilidad sólo se podrá predicar respecto de quien genera la condición o

causa que efectivamente lo produce y por eso la responsabilidad civil, no puede deducirse si no cuando proviene y se demuestra que fue generada por el imputado.

"...PARA QUE RESULTE COMPROMETIDA LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, A TITULO EXTRACONTRACTUAL, SE PRECISA DE LA OCURRENCIA DE TRES ELEMENTOS QUE LA DOCTRINA MAS TRADICIONAL IDENTIFICA COMO "CULPA, DAÑO Y RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE AQUELLA Y ESTE" ..." Así se expresa nuestra Corte Suprema de Justicia en su sala de decisión civil, a través de la decisión de octubre 25 de 1999, con ponencia del Doctor JOSE FERNANDO RIVERA GOMEZ.

Es necesario que exista una relación de causa efecto, en otras palabras, de antecedente – consecuencia entre la conducta culposa y el daño causado, pues de lo contrario no hay lugar a responsabilidad civil extracontractual y no nacerá la obligación de indemnizar, lo cual significa que el daño causado debe ser consecuencia de la conducta antijurídica a fin de que se configure un supuesto de responsabilidad civil, tanto de carácter contractual como extracontractual.

Es la relación de causalidad un requisito general de la responsabilidad civil.

El hecho causal se escinde o rompe cuando se dan tres fenómenos o causa ajena cuya imputabilidad no es de resorte del presunto responsable, así:

HECHO DE LA VICTIMA, (b) FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO, (c) HECHO DE UN TERCERO.

En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia colombiana ha reafirmado la exigencia del nexo causal entre la conducta y el daño y, salvo las excepciones a que ya nos hemos referido, afirma la necesidad de que sea el demandante quién establezca esa relación o nexo.

Por lo demás, es sabido que en tratándose de culpa extracontractual el actor tiene a su cargo la demostración plena de todos los factores necesarios para llevar a la conciencia del juzgador una convicción de tal naturaleza que determine lógicamente una condenación. Deberá demostrar el daño, la culpa y la relación causal entre los dos primeros elementos.

En el presente evento, si bien puede hablarse de la existencia de un daño, no se ha establecido el hecho, acción u omisión, de los demandados, del cual se derive responsabilidad alguna, pues los hechos relatados en la presente demanda, no fueron probados, toda vez que no se logró demostrar la relación de causalidad entre el supuesto daño ocasionado y la conducta de los demandados.

Por lo anterior esta excepción esta llamada a prosperar.

TERCERA EXCEPCION: INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS

En otras palabras, la carga de la prueba a que se refiere el artículo 167 del C.G.P., que expresa: "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Corresponde a la parte actora probar, no solo la existencia del daño, y que este fue el resultado de la conducta culposa de los demandados, como también la cuantía del perjuicio reclamado.

En el asunto debatido, no existe prueba de lo pretendido por la parte demandante, toda vez que únicamente se han limitado a enunciar unos presuntos perjuicios, sin aportar prueba de ellos, olvidando que para el reconocimiento de los mismos no puede someterse a un aleas o al capricho de quien los está solicitando, porque constituye premisa del daño el que sea real, actual e indemnizable, circunstancias que deben presentarse simultáneamente y en la demanda se reclaman unos daños en gran dimensión, que imponen esfuerzo probatorio a cargo de quien los reclama, siendo de cargo del demandante acreditarlos de manera eficaz.

En el evento que se demuestre la ocurrencia del supuesto hecho, es menester precisar que los conductores están bajo la presunción de culpa que determina el ejercicio de actividades peligrosas frente al daño causado, ambos se hallan en idénticas condiciones, es decir, ambos fueron causantes del daño sufrido, mientras no se demuestre otra cosa.

En esa medida, la concurrencia de actividades peligrosas en la determinación del perjuicio, destruye la presunción de culpa y por lo tanto queda en cabeza de la parte actora, la carga de todos los elementos esenciales para la estructuración de la responsabilidad, incluido el elemento subjetivo o culpa.

Por lo expuesto, la supuesta responsabilidad endilgada a los demandados y la obligación indemnizatoria que pretende atribuirseles, no son susceptibles de presunción y por ello deben probarse. No basta, como al parecer lo estima la parte actora, con la afirmación y la formulación del cargo en su contra, pues estamos lejos de que en nuestro derecho se acepte la responsabilidad objetiva en un evento como el presente. Entonces, para la viabilidad de la declaración de una responsabilidad de los demandados, necesariamente debe contarse, de manera previa, con la prueba en el expediente de que se reúnen todos los elementos que la estructurarían, como son el hecho/culpa, el daño y la inexorable relación de causalidad entre ambos.

En este sentido la presunta responsabilidad que se pretende endilgar al conductor del vehículo asegurado, le corresponde a la parte actora demostrar los supuestos de hecho que manifiesta en la demanda, pues como reitero, a la parte actora le corresponde demostrar la veracidad de los hechos aquí narrados, circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que estos ocurrieron, lo cual no se encuentra acreditado dentro del presente proceso.

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico la conducción de vehículos es considerada una actividad peligrosa; partiendo del caso que nos ocupa, en lugar de colegir maquinalmente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el Juez deberá establecer si realmente a ella hay lugar en el caso concreto, juicio para cuya elaboración deberá tomar en consideración la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. Más exactamente, la aniquilación de la presunción de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generación de un daño presupone que el Juez advierta, previamente, las específicas circunstancias en las que se produjo el accidente.

Así las cosas, la parte actora no puede pretender, endilgar responsabilidad al señor al señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO conductor del vehículo de placas SER-115**, pues es deber obligacional de esta, demostrar los elementos que estructuran el juicio de responsabilidad que son el hecho, el daño, y nexos causal, elementos que aquí brillan por su ausencia.

Consecuentemente, las circunstancias de ocurrencia del referido accidente de tránsito, y las causas que originaron el mismo, corresponden al fondo del presente litigio y por ende, no puede efectuarse de manera anticipada ningún juicio de valor en ese sentido, ya que el Juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica valorará en conjunto todas las pruebas que se practiquen dentro del proceso.

De todos modos, sin perjuicio de lo expuesto en líneas precedentes, nótese que en este caso particular, los vehículos involucrados en el suceso ocurrido el 24 de julio de 2020, se encontraban en el ejercicio de una actividad peligrosa, esto es, la conducción de vehículos y por tanto, la presunción sobre la culpa se neutraliza, teniendo la parte actora la carga de probar la culpa de los aquí demandados, conforme lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia al considerar que en el caso de las actividades peligrosas, la culpa se presume, salvo que las partes en controversia se encuentren en el desarrollo o ejercicio de ellas, pues bajo ese entendido el problema se analizaría desde la perspectiva del artículo 2341 del Código civil, esto es, bajo la normativa de la culpa probada y no a la luz del artículo 2356 del Código Civil.

Por lo anterior esta excepción esta llamada a prosperar.

CUARTA EXCEPCIÓN: ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA

El fundamento de la indemnización de perjuicios que surge a consecuencia de un accidente de tránsito tiene como finalidad única la de restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de que el hecho dañoso o no querido viniera a transformar las circunstancias de los involucrados, sin que de ninguna manera ese derecho o potestad supere los límites y se traduzca en un beneficio adicional sino que el mismo debe corresponder exclusivamente a la pérdida económica o moral ocasionada a los afectados.

El cobro de los perjuicios efectuados en la demanda que dio origen a la presente acción; supera los límites de la indemnización a la que tendrían derecho los demandantes, en caso de que sus pretensiones sean resueltas a su favor, pues solicitan el pago de unos supuestos perjuicios sin que se logre sustentar su cobro.

Máxime que dentro del proceso que hoy nos ocupa, no están demostradas las pretensiones y los perjuicios que pretende la parte actora hacer valer, toda vez que como lo reitero los perjuicios deben ser plenamente probados y soportados dentro del proceso, lo anterior de acuerdo a los artículos 1613, 1614 del C.C.; artículo 97 del C.P.

Consecuentemente se está ante una insuficiencia de la prueba, de parte del que está encargado de producirla, arrojando como consecuencia la denegación de su pretensión. *Actore non probandi, reus absolvitur*. La prueba incumbe a la parte demandante; quien debe aportarla en su debida oportunidad para poder ser controvertida y evitar así que el demandado se le viole el derecho al debido

proceso y de defensa. Por lo anterior se puede concluir que el demandante que no ha probado suficientemente su derecho, está infundado en su pretensión.

Por lo anterior esta excepción esta llamada a prosperar.

QUINTA EXCEPCION: LAS MERAS EXPECTATIVAS NO SON INDEMNIZABLES

Resulta claro que las meras expectativas no son indemnizables, como bien lo ha expresado reconocida doctrina, según la cual, "Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se había encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera omitido el acto que se reprocha". Dice la corte en jurisprudencia: "Es verdad averiguada que para el reconocimiento de un perjuicio se requiere, además de ser cierto y, en línea de principio, directo, que esté plenamente acreditado, en concordancia con la Ley, existiendo para ello libertad de medios probatorios.

"Solo es posible el reconocimiento de un perjuicio que realmente hay ocurrido, no se tienen en cuenta situaciones hipotéticas o historias que existan en la mente de quién pretende el reconocimiento de un detrimento, bien sea material o inmaterial.

La certeza del daño está directamente relacionada con la materialidad del mismo y con las consecuencias que trae tal situación, las cuales, no pueden ser etéreas o superfluas." Libro liquidación de perjuicios y ajuste de pérdidas de seguros, paginas 35,36. Doctor OSCAR MARIN MARTINEZ.

Por lo anterior esta excepción esta llamada a prosperar.

SEXTA EXCEPCION: CARENCIA DE PRUEBA DEL SUPUESTO PERJUICIO:

Esta excepción enerva las pretensiones en cuanto ellas se erigieron pese a la carencia absoluta de medios de prueba respecto a la producción, naturaleza e incluso la cuantía del supuesto detrimento alegado por los actores, puesto que estos no son susceptibles de presunción alguna y requiere de su fehaciente demostración para poder ser considerado; en otras palabras, no basta simplemente con afirmar la producción o existencia de un perjuicio, sino que es requisito indispensable demostrarlo mediante pruebas auténticas, confirmadas y veraces, que le permitan al juez de instancia, tomar una decisión acertada frente al reconocimiento del perjuicio, en caso obviamente que se haya comprobado antes, la eventual e improbable responsabilidad de los demandados, y en ese orden de ideas la obligación resarcitoria que surge.

Por lo anterior esta excepción esta llamada a prosperar.

SEPTIMA EXCEPCION: EL INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO NO SE CONSIDERA UN DOCUMENTO VINCULANTE

Se señala en la Sentencia T-475 de 2018 de la Corte Constitucional que el Informe Policial de Accidente de Tránsito no es un informe pericial sino un documento descriptivo que tiene unos criterios de evaluación propios diferentes a los establecidos en nuestro Código General del Proceso.

La evaluación de este documento debe hacerse referente a la utilización adecuada de los protocolos que permitieron la existencia de tal informe y por ello las preguntas planteadas en el proceso deben versar sobre el ceñimiento de los agentes al protocolo establecido.

En tal sentido se hace necesaria la presencia del policía que realizó dicho informe para que, conforme a lo estipulado, rinda testimonio sobre el documento aportado, pues nadie más que él podría hacerlo.

En resumen, este documento aportado como prueba debe revisarse en conjunto con otras pruebas, como la testimonial, de lo contrario la misma por sí sola no tiene fuerza vinculante y no cumple con el objetivo de demostrar sin atisbo de duda lo acaecido.

Por lo anterior esta excepción esta llamada a prosperar.

OCTAVA EXCEPCION: INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD Y DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LOS DEMANDADOS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Y la SOCIEDAD GRUPO C.L.A.U. S.A.S. Sigla: GRUPO C.L.A.U. S.A.S.

Formulo esta excepción en virtud de que en este caso es claro que no se reúnen los elementos para que se estructure la responsabilidad civil que pretende endilgarse a la parte pasiva, como son el hecho, la culpa, el daño o perjuicio y la ineludible relación de causalidad entre el primero y este último.

En este punto es imperativo hacer notar que en este caso la actividad desplegada por los implicados en el accidente es de las denominadas peligrosas y por lo tanto, la presunción sobre la culpa se neutraliza y por ello la parte actora tiene la carga de probar la culpa que pretende atribuir a la parte pasiva de esta acción en la ocurrencia del accidente, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en reiterada Jurisprudencia.

Las altas Cortes han reiterado que la concurrencia de actividades peligrosas elimina la presunción de culpas y determina la carga probatoria del demandante de demostrar la culpa del demandado, desplazando el caso a la aplicación del régimen general de culpa probada. De esta manera quién pretende la indemnización de un daño ocasionado por una situación como la que nos ocupa, en la que demandante y demandado se encuentran en iguales condiciones, corresponde a los actores la carga de probar la culpa de la parte pasiva de la acción

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que, en el caso de las actividades peligrosas, la culpa se presume, salvo que las dos partes en controversia se encuentren desplegando actividades peligrosas, pues aquí el problema se analiza desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, esto es, bajo la normatividad de la culpa probada; es decir, que no se tiene en cuenta el artículo 2356 del C.C., que se fundamenta en la responsabilidad presunta. Lo anterior se materializa en la siguiente Sentencia, en la que la Corte confirmó el fallo citando apartes de la Sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca:

“Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 ibidem, evento en el cual el demandante corría con la carga de

demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual”.

En otra Sentencia, la Corte Suprema de Justicia confirmó los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Armenia, aplicando el régimen de la culpa probada, por el hecho de tratarse de concurrencia de actividades peligrosas, así:

“La parte demandante debió probar la culpa de los demandados, por tratarse de una colisión entre dos vehículos automóvil y bicicleta que transitaban bajo la presunción de actividades peligrosas, para el caso la presunción de culpa se neutraliza y lo aplicable no sería el artículo 2356 del Código Civil sino 2341 de culpa probada.”

Adicionalmente, en otra providencia, la Corte Suprema, siguiendo la misma línea argumentativa, señala que la “...actividad desplegada por las partes es de las denominadas peligrosas, razón por la cual las presunciones sobre su culpa se neutralizan. Por ello, habrá que responsabilizar a quién se le demuestre una culpa efectiva.”

Entonces en este caso, para que pueda declararse el nacimiento de una responsabilidad civil en cabeza de las demandadas, no basta con la simple formulación del cargo en su contra. La carga de la prueba es de quién alegue un hecho del que pretenda derivar consecuencias jurídicas y/o económicas y en este caso no se ha acreditado ni la culpa que pretende endilgarse a los demandados, ni el supuesto perjuicio alegado.

Por lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

NOVENA EXCEPCION: CONCURRENCIA DE CULPAS

Propongo la presente excepción, reiterando que el origen de la presente demanda está fundamentado sobre la **ACTIVIDAD PELIGROSA**, consagrada en el artículo 2356 del Código Civil, ya que se trata de un accidente de tránsito donde se vieron involucrados un automóvil y una motocicleta. Es así como el legislador en el artículo 2356 del Código Civil, advirtió que ciertas conductas creaban una peligrosidad de tal magnitud que eran por si mismas prueba indiciadora de quién las había desplegado había actuado en forma culposa que genera para el conductor involucrado, una presunción de responsabilidad, la cual no puede recaer únicamente en cabeza del Señor **LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO conductor del vehículo de placas SER-115** por lo tanto, se debe determinar cuál fue la causa eficiente del hecho.

Se trata de una de las eximentes parciales de responsabilidad civil que de vieja data han identificado la doctrina y la jurisprudencia.

Máxime que dentro del proceso no está demostrada la responsabilidad de la parte demandada.

“Por nuestra parte, creemos que para entender cabalmente cómo debería operar la reducción del resarcimiento en caso de que el actor no haya adoptado las medidas que hubieran evitado o mitigado el daño debemos recordar que la carga de diligencia consigo mismo impone la necesidad de actuar a fin de contener los daños provocados por un tercero (deudor o tercero absoluto), dando así relevancia causal a la omisión del perjudicado, pero esto no significa que necesariamente

dicha relevancia causal conlleve una interrupción del nexo de causalidad, sino que muchas veces, la omisión da lugar a una concausa, es decir, no hay interrupción sino concurso causal.

En otras palabras, si la acción que el perjudicado estaba llamado a ejecutar a fin de evitar o mitigar el daño hubiera sido apta para frenar del todo el proceso causal, de modo que el resultado dañino, o daño específico de que se trata, no se hubiera producido, debemos concluir que la omisión del perjudicado ha interrumpido el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, de manera que deberá ser soportado íntegramente por el perjudicado. Por el contrario, si la acción hubiera sido apta solo para evitar una parte del daño que amenazaba, o bien para mitigar parcialmente aquel ya producido, debemos concluir que la omisión se comporta como una concausa del daño sufrido, conllevando, por tanto, la repartición de responsabilidades entre responsable por el hecho lesivo y la víctima de él. (Página 399 y 340 La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico-comparado-Lilian C. San Martin Neira)

En derecho es ampliamente reconocida la **TEORIA DE LA ASUNCION DE RIESGOS**, Principio explicado y aplicado por **JEAN HONORAT, PHILIPPE MALAURSE y RENE SAVATIER**, según el cual:

“Quien se expone a un riesgo en forma voluntaria, debe correr con las consecuencias del mismo.

La aceptación de riesgos así considerada se asemeja estrechamente a un consentimiento del daño:

Exponerse voluntariamente a un peligro quiere decir, en cierta medida consentir un daño que de ese peligro puede resultar, puesto que solo corresponde a la víctima eventual eliminar toda posibilidad de realización del daño, renunciando exponerse al riesgo”.

De acuerdo al tratado TECNICO- JURIDICO SOBRE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y MATERIAS AFINES, OCTAVA EDICIÓN DEL DOCTOR CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA, en su página 102, Literal **C. CONCURSO DE LA VÍCTIMA DEL DAÑO**

Otra causa que puede excluir o reducir la responsabilidad por culpa, es el **concurso de la víctima del daño**.

Este concurso puede asumir el carácter de cooperación culposa cuando hay un encuentro de voluntades en la conducta ilícita de la cual proviene el daño, como en el caso de la persona que confía el manejo de su carro a un sujeto no idóneo para tal fin, o el de quien da a otro la conducción de un vehículo sabiendo que éste adolece de fallas en órganos mecánicos fundamentales y a consecuencia de esto ocurre un accidente.

Existe, por el contrario, otra figura cuya esencia es el concurso de culpa de varias personas, en la cual las causas obran independientemente la una de la otra, no obstante, su confluencia en la producción del evento. En tal caso puede concurrir la culpa del tercero o la culpa de quien ha sufrido el daño, o la de ambos.

De la primera ya hemos dicho algo. Nos queda por aludir al concurso de culpa del sujeto pasivo del daño, respecto del cual existen dos hipótesis: la primera, cuando

la culpa de la víctima es causa exclusiva del evento dañoso; la segunda, cuando la culpa de ésta es solo causa concurrente.

La primera hipótesis se presenta cuando la culpa del sujeto perjudicado interfiere de tal manera el proceso causal puesto en movimiento por el sujeto activo del daño, que se interrumpe el nexo de causalidad entre el comportamiento de éste y el evento, sustituyéndolo por completo. En tal caso la responsabilidad no puede ponerse a cargo del damnificador, porque en realidad él no es autor del daño, sino la propia víctima que con su comportamiento fue su causa efectiva y real.

C.C. Legis, pág. 1060 {11893} Jurisprudencia. - **Responsabilidad civil por actividades peligrosas concurrentes.** "Es más, en la responsabilidad civil por actividades peligrosas concurrentes, es preciso advertir, la imperiosa necesidad de examinar la objetiva incidencia del comportamiento para establecer su influjo definitivo o excluyente, unitario o coligado, en el daño, o sea, la incidencia causal de las conductas y actividades reciprocas en consideración a los riesgos y peligros de cada una, determinando en la secuencia causativa, cual es la relevante en cuanto determinante del daño y cual no lo es y, de serlo ambas, precisar su contribución o participación". (CSJ, Cas. Civil, Sent. Ago. 24/2009. Exp. 2001-01054, M.P. William Namén Vargas).

Al respecto el honorable Consejo de Estado en Sentencia del 19 de octubre de 2011, Sección Tercera ha manifestado:

JURISPRUDENCIA. - **Participación de la víctima en el hecho dañoso.** "De acuerdo con lo que ha establecido esta sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de "realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado".(...)

Entonces, dado que la participación de la víctima en la realización del hecho dañoso puede ser inexistente, parcial o total, se impone al Juez analizar, en cada caso, dicho nivel de participación con el objetivo de imputar el daño atendiendo la existencia de una causa única, o de concurrencia de causas en la materialización del daño.

En dicho análisis, el Juez debe tener en cuenta que, "es claro que el hecho de la víctima a efectos de que sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en relación con el demandado, las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor, comoquiera que no existe disposición jurídica que radique en cabeza del tercero a quien se le imputa el daño la obligación de precaver los hechos de la víctima y, más aun, de evitarlos".

Por lo tanto, con el objetivo de acreditar la culpa del tercero en el hecho dañoso, basta la demostración de que su comportamiento fue decisivo, determinante y exclusivo. Así lo ha establecido esta sección cuando concluye que "no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima, que el presunto responsable acredite que la conducta de aquella fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la

producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación”.

(C.E., Sec. Tercera, Sent. 1996-02749, Oct. 19 de 2011. M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.).

Por lo anterior esta excepción esta llamada a prosperar.

DECIMA EXCEPCION: ILEGITIMAD EN LA CAUSA POR PASIVA

Propongo la presente excepción por cuanto el señor **LUIS ARMANDO VALENCIA CASALLAS**, no era el conductor del vehículo de PLACAS **SRE115**, lo anterior de conformidad con el Informe Policial de Accidentes de Tránsito acápite **No 8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS. 8.1 CONDUCTOR LUIS ARMANDO VALENCIA GALLEGO. 8.2 PLACAS SER-115**, situación que no fue desvirtuada, ni se presentó objeción u oposición por el demandante ante la secretaria de Transito de Yotoco.

GENÉRICA Y OTRAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante acción directa. Así las cosas, solicito amablemente al despacho se declare probada la presente excepción.

A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

Por no asistirle razón jurídica a la parte demandante, niego y me opongo al derecho que pretenda invocar como fundamento de las pretensiones.

En este orden de cosas, es claro, como lo sostuvo el profesor Valencia Zea y lo ha recogido la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, que en los eventos en que existen diferentes causas de un daño, el compromiso de la responsabilidad solo se podrá predicar respecto de quien genera la condición o causa que efectivamente lo produce y por eso la responsabilidad civil/ administrativa, no puede deducirse si no cuando proviene y se demuestra que fue generada por el imputado.

A LA CUANTIA:

Me opongo a ella por ser improcedente y falta de sustento legal y probatorio.

A LAS PRUEBAS:

Sírvase Señor Juez, darles el justo valor probatorio que les asigna la Ley, y me opondré a ellas en el momento procesal oportuno, además me reservo el derecho de interrogar y contrainterrogar a los testigos que sean decretados y citados por el despacho.

COMPETENCIA – PROCEDIMIENTO

Es usted señor Juez competente por los factores de la competencia que se enuncian y el procedimiento que se ha impulsado, por el lugar donde ocurrieron los hechos.

NOTIFICACIONES

A mi poderdante y las demás partes reconocidas en el proceso se le puede notificar cualquier decisión en las direcciones ya conocidas en autos.

Las notificaciones personales las recibiré en su despacho o en mi oficina de Abogada ubicada en la Calle 29 No 27-40 Oficina 604 edificio Banco de Bogotá de la ciudad de Palmira. Cel. 318-2115503- 317-6921134. Correo electrónico firmadeabogadosjr@gmail.com

Del Señor Juez;

Atentamente,



JACQUELINE ROMERO ESTRADA
C.C No 31.167.229 de Palmira V.
T.P. No 89930 del C. S de la .J